

Introducción a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

La Convención ofrece nuevas esperanzas para luchar contra la desertificación

En las últimas décadas el problema de la degradación de tierras en las regiones de zonas secas ha seguido empeorando. La Convención promueve un nuevo método para gestionar los ecosistemas de tierras secas y lo que tiene igual importancia, administrar las aportaciones de ayuda al desarrollo.

La desertificación está causada por la variabilidad climática y por las actividades humanas

En el pasado las tierras secas se recuperaban con facilidad después de sequías y períodos secos prolongados; sin embargo, en las circunstancias actuales de la vida moderna, a menos de que se gestionen de forma sostenible, las tierras secas tienden a perder rápidamente su productividad biológica y económica. En la actualidad, las tierras secas de todos los continentes se están degradando como consecuencia del sobrecultivo, el pastoreo excesivo, la deforestación, y las prácticas inadecuadas de riego, y esa explotación excesiva obedece generalmente a causas económicas y sociales, al desconocimiento, a los conflictos y a las sequías. (Véase la ficha informativa 2.)

La desertificación socava la productividad de la tierra y contribuye al aumento de la pobreza

Las primeras víctimas de la desertificación son los recursos básicos (por ejemplo, la superficie fértil de la tierra, el manto vegetal, y los cultivos sanos). Los habitantes mismos empiezan a sufrir las consecuencias cuando los suministros de alimentos y agua comienzan a escasear, y en los casos extremos experimentan hambrunas, migraciones en masa y pérdidas económicas ingentes. Más de 250 millones de personas se hallan directamente afectadas por la desertificación, y alrededor de 1.000 millones están amenazadas por ella. (Véase la ficha informativa 3.)

La Convención de Lucha contra la Desertificación se está aplicando mediante la adopción de programas de acción

Estos programas, que son el principal motor de la Convención, abordan a nivel nacional las causas fundamentales de la desertificación y la sequía, y determinan las medidas que será necesario adoptar para paliarla e invertir la tendencia. Los programas nacionales se pueden complementar con programas a nivel subregional y regional, en particular cuando se trate de recursos transfronterizos como lagos y ríos. Los programas de acción se detallan en los cinco anexos de aplicación regional a la Convención, a saber, para África, Asia, América Latina y el Caribe, el Mediterráneo norte, y Europa central y oriental. (Véase la ficha informativa 4.)

La Convención promete reorganizar sensiblemente el proceso de ayuda internacional

La Convención procura impulsar la participación de países y organismos donantes y naciones beneficiarias dentro de un nuevo marco de asociación. Los papeles respectivos de donantes y beneficiarios se definen en acuerdos de asociación concertados mediante un proceso consultivo. El objetivo que se persigue es garantizar una mejor coordinación de los programas de financiación; velar por que la adjudicación de los recursos financieros se base en las necesidades de los países afectados; que los donantes puedan cerciorarse de que sus fondos se empleen correctamente; y que los destinatarios obtengan el mayor beneficio posible de los recursos disponibles. (Véase la ficha informativa 5.)

Otro cambio radical es la importancia que la Convención da a un método "de abajo hacia arriba" con una amplia participación local en la toma de decisiones

Tradicionalmente, las comunidades locales han sido participantes relativamente pasivos en los proyectos de desarrollo. Ahora la Convención los pone en un plano de igualdad con otros actores en el proceso de desarrollo. Las comunidades y sus autoridades, así como organizaciones no gubernamentales, expertos y funcionarios de gobierno, trabajan

en forma mancomunada en la formulación de los programas de acción. Para que este innovador y complicado proceso funcione, es necesario organizar campañas de sensibilización con el fin de informar al público de las nuevas oportunidades que ofrece la Convención. (Véase la ficha informativa 6.)

La ciencia y la tecnología son herramientas vitales en la lucha contra la desertificación

El Comité de Ciencia y Tecnología, establecido en el marco de la Convención, promueve la cooperación tecnológica y científica entre instituciones nacionales, subregionales y regionales mediante la recopilación de datos, el análisis y el examen, así como la aportación de conocimientos y de asesoramiento científico actualizado. La degradación de tierras puede minimizarse tanto con las tecnologías nuevas como con las tradicionales, desde la vigilancia por satélite hasta el abancalamiento de laderas escarpadas. La ciencia y la tecnología deben satisfacer las necesidades reales de las personas, y la Convención anima a los investigadores de todo el mundo a unir sus aptitudes con este cometido. (Véase la ficha informativa 7.)

Los recursos financieros han de encauzarse e invertirse de forma más eficaz

La mayor parte de la financiación se obtiene en los propios países afectados, pero los programas bilaterales de asistencia y los organismos internacionales también aportan sumas considerables. Se ha establecido un mecanismo mundial con objeto de fomentar la movilización de recursos financieros, y se animará asimismo a la búsqueda de fuentes de financiación innovadoras, incluidos los canjes de deuda y la

financiación del sector privado. Además, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) ha sido designado como un mecanismo financiero para la Convención. Por ello y también para mejorar la aplicación de la Convención, el FMAM adoptó un nuevo Programa Operacional exclusivamente diseñado para financiar acciones relacionadas con la degradación de la tierra. También se fomentan los recursos financieros innovadores, incluyendo el intercambio de deudas y la intervención financiera del sector privado.

La Convención crea un número de instituciones y procedimientos para orientar la acción internacional

La Convención entró en vigor el 26 de diciembre de 1996, tres meses después de su quincuagésima ratificación. En septiembre de 2008, la habían ratificado o se habían adherido a ella 193 Partes. El órgano supremo de la Convención es la Conferencia de las Partes (CP), que incorpora a los gobiernos que la han ratificado y a las organizaciones de integración económica regional. Para su labor, cuenta con la asistencia de dos órganos subsidiarios, un Comité de Ciencia y Tecnología, y un Comité de examen de la aplicación de la Convención. La CP mantuvo ocho reuniones hasta comienzos del 2008, celebrándose en Octubre de 1997 la primera de ellas. La CP continuará reuniéndose bianualmente en el futuro.

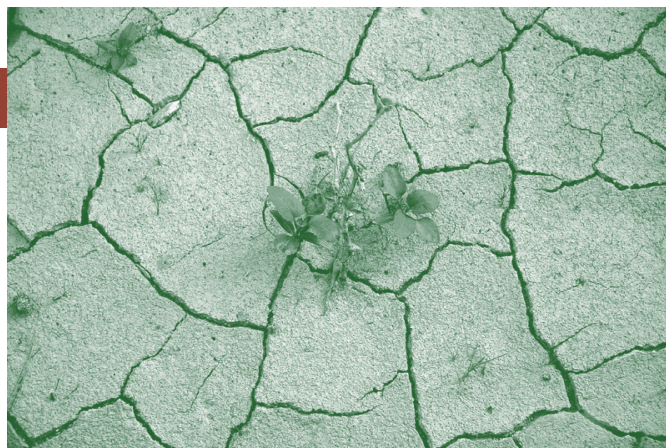


Foto © Pamela Ceron Valladares

La desertificación es ante todo un problema de desarrollo sostenible

Es una cuestión de pobreza y bienestar humano, así como de preservación del medio ambiente. Los problemas sociales y económicos, como la seguridad alimenticia, las migraciones y la estabilidad política, están estrechamente relacionados con la degradación de tierras y la sequía. Lo mismo cabe decir de otras cuestiones ambientales, como el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y el abastecimiento de agua dulce. La Convención pone de relieve la necesidad de coordinar los esfuerzos de investigación y los programas de acción en la lucha contra la desertificación. (Véase la ficha informativa 10.)

2008: Nuevo marco y plan estratégico para la Convención

En septiembre de 2007, la Octava Conferencia de las Partes adoptó en Madrid el Marco y Plan Estratégico decenal (1998-2008) para mejorar la aplicación de la Convención (la Estrategia). Para hacer de la Convención un organismo internacional que dé respuesta a los asuntos medioambientales que afectan a la tierra y a sus ecosistemas y que merecen el impulso y una decidida movilización internacional. La Estrategia designa como objetivos de operación asuntos como la sensibilización, el marco de políticas, la ciencia y la tecnología y el fomento de la capacidad (Ver Hoja 16).



Naciones Unidas

Convención de Lucha contra la Desertificación



The causes of Desertification

Desertification is the degradation of drylands

It involves the loss of biological or economic productivity and complexity in croplands, pastures, and woodlands. It is due mainly to climate variability and unsustainable human activities. The most commonly cited forms of unsustainable land use are overcultivation, overgrazing, deforestation, and poor irrigation practices. Seventy percent of the world's drylands (excluding hyper-arid deserts), or some 3,600 million hectares, are degraded. While drought is often associated with land degradation, it is a natural phenomenon that occurs when rainfall is significantly below normal recorded levels for a long time.

Drylands respond quickly to climatic fluctuations

By definition, drylands have limited freshwater supplies. Precipitation can vary greatly during the year. In addition to this seasonal variability, wide fluctuations occur over years and decades, frequently leading to drought. Over the ages, dryland ecology has become

familiar to this variability in moisture; plants and animals can respond to it rapidly. For example, satellite imagery has shown that the vegetation boundary south of the Sahara can move by up to 200 km when a wet year is followed by a dry one, and vice versa.

People must also adjust to these natural fluctuations

The biological and economic resources of drylands, notably soil quality, freshwater supplies, vegetation, and crops, are easily damaged. People have learned to protect these resources with age-old strategies such as shifting agriculture and nomadic herding. However, in recent decades these strategies have become less practical due to changing economic and political circumstances, population growth, and a trend towards more settled communities. When land managers cannot or do not respond flexibly to climate variations, desertification is the result.

The relatively low priority given to environmental protection often leads to poor land management decisions

The overuse of land may result from specific economic conditions or from inappropriate land laws or customs. In many cases, unregulated access to land resources may lead some individuals to maximize their own gains by overexploiting the land at the expense of the community as a whole. Poor people, particularly poor women, often lack access to the best land, depending instead on the most fragile areas and resources. Their poverty may give them little alternative but to extract what they can from the scarce resources available to them, even though this degrades the land.

International economic forces can encourage people to overexploit their land

International trade patterns can lead to the short-term exploitation of local resources for export, leaving little profit at the community level for managing or restoring the land. Similarly, the development of an economy based on cash crops, or the imposition of taxes, can distort local markets and promote overexploitation of the land.



Photo © Samuel de Leon

Ignorance, errors, and natural and man-made disasters can also contribute to land degradation

Ignorance of the natural environment played an important role in the US during the infamous Dust Bowl of the 1930s; among other errors, during a time of drought Midwestern farmers used ploughs better suited for the more temperate latitudes of Western Europe. In recent decades, similar mistakes in the choice of policies or technologies have led to land degradation in many countries, both developed and developing. Disasters such as wars and national emergencies also

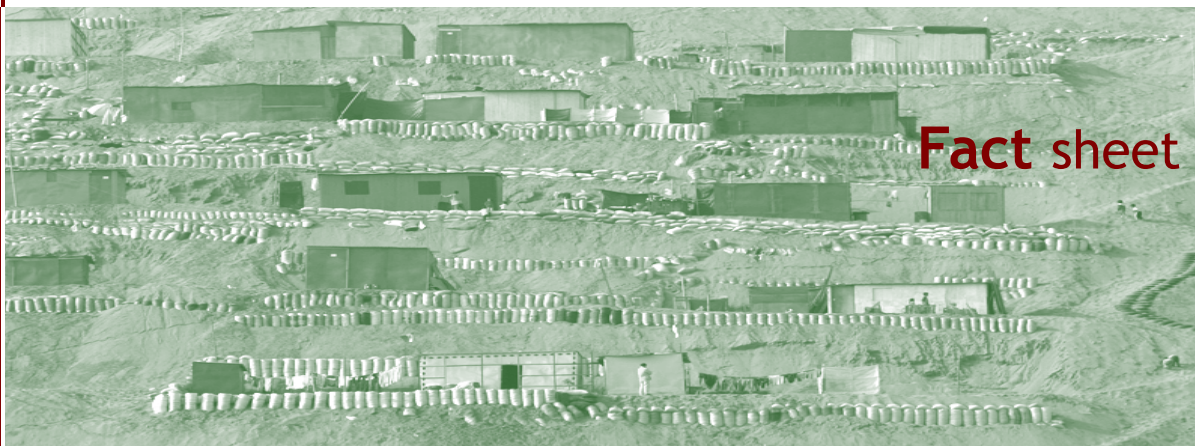
destroy productive land by displacing its managers or causing heavy concentrations of migrants to overburden an area. Natural disasters such as floods and droughts can have a similar effect.

What roles do increasing populations and population densities play?

It is tempting to conclude that an expanding human population is the ultimate driving force behind desertification. More people in an area inevitably exert a greater pressure on that area's resources; sometimes this pressure is indirect, as when growing urban populations place demands on food production in

uncrowded rural areas. But the causes of desertification are complex, and the relationship between two variables such as population and desertification is not clear-cut. For example, a decline in population can result in desertification since there may no longer be enough people to manage the land adequately. Many hillside terraces in Yemen have fallen into disrepair with the exodus of labour to neighbouring oil-rich countries. Examples can also be cited of areas that support large concentrations of people without much degradation, such as around the city of Kano in Nigeria.





The consequences of desertification

Desertification reduces the land's resilience to natural climate variability

Soil, vegetation, freshwater supplies, and other dryland resources tend to be resilient. They can eventually recover from climatic disturbances, such as drought, and even from human-induced impacts, such as overgrazing. When land is degraded, however, this resilience is greatly weakened. This has both physical and socio-economic consequences.

Soil becomes less productive

Exposed and eroded topsoil can be blown away by the wind or washed away by rainstorms. The soil's physical structure and biochemical composition can change for the worse. Gullies and cracks may appear and vital nutrients can be removed by wind or water. If the water table rises due to inadequate drainage and poor irrigation practices, the soil can become waterlogged, and salts may build up. When soil is trampled and compacted by cattle, it can lose its ability to support plant growth and to hold moisture, resulting in increased evaporation and surface run-off.

Vegetation becomes damaged

The loss of vegetation cover is both a consequence and a cause of land degradation. Loose soil can sandblast plants, bury them, or leave their roots dangerously exposed. When pastures are overgrazed by too many animals, or by inappropriate types, edible plant species may be lost, allowing inedible species to invade.

Some of the consequences are borne by people living outside the immediately affected area

Degraded land may cause downstream flooding, reduced water quality, sedimentation in rivers and lakes, and siltation of reservoirs and navigation channels. It can also cause dust storms and air pollution, resulting in damaged machinery, reduced visibility, unwanted sediment deposits, and mental stress. Wind-blown dust can also worsen health problems, including eye infections, respiratory illnesses, and allergies. Dramatic increases in the frequency of dust storms were recorded during the Dust Bowl years in the US, in the Virgin Lands scheme area in the former USSR in the 1950s, and in the African Sahel during the 1970s and 1980s.

Food production is undermined

Desertification is considered a major global environmental issue largely because of the link between dryland degradation and food production. A nutritionally adequate diet for the world's growing population implies tripling food production over the next 50 years. This will be difficult to achieve even under favourable circumstances. If desertification is not stopped and reversed, food yields in many affected areas will decline. Malnutrition, starvation, and ultimately famine may result. The relationship between soil degradation and crop yields, however, is seldom straightforward. Productivity is affected by many different factors, such as the weather, disease and pests, farming methods, and external markets and other economic forces.

Desertification contributes to famine

Famine typically occurs in areas that also suffer from poverty, civil unrest, or war. Drought and land degradation often help to trigger a crisis, which is then made worse by poor food distribution and the inability to buy what is available.

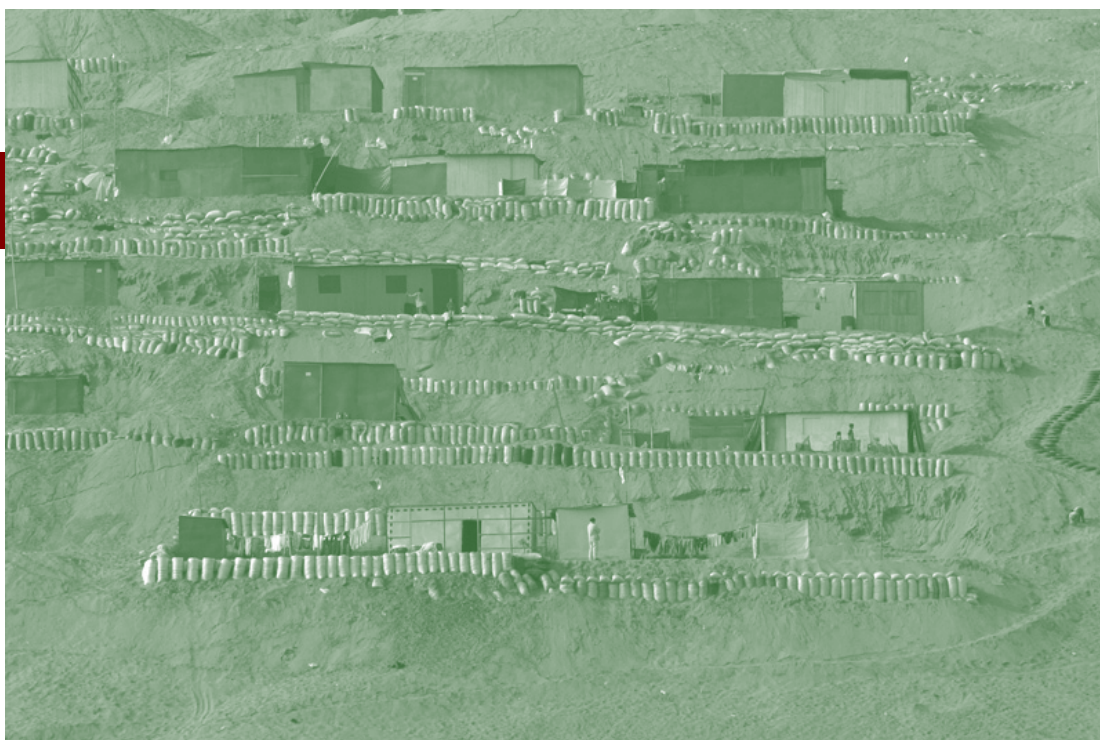


Photo © Ana Cecilia Gonzales Vigil

Desertification has enormous social costs

There is now increased awareness of the relationship between desertification, mass migration, and conflicts. In Africa, many people have become internally displaced or forced to migrate to other countries due to war, drought, and dryland degradation. The environmental resources in and around the cities and camps where these people settle come under severe pressure. Difficult

living conditions and the loss of cultural identity further undermine social stability.

Desertification is a huge drain on economic resources

There is little detailed data on the economic losses resulting from desertification, although an unpublished World Bank study suggested that the depletion of natural resources in one Sahelian country was equivalent to 20% of its annual Gross Domestic Product (GDP).

At the global level, it is estimated that the annual income foregone in the areas immediately affected by desertification amounts to approximately US\$ 42 billion each year. The indirect economic and social costs suffered outside the affected areas, including the influx of “environmental refugees” and losses to national food production, may be much greater.





Action programmes for combating desertification

The Convention to Combat Desertification is being implemented through national action programmes (NAP)

Developed country Parties and affected country Parties are expected to consult on their respective roles in supporting these programmes, which can result in a more holistic, integrated and participatory management of natural resources in drylands ecosystems. Once significant effort has been made to design a framework programme, international solidarity might facilitate the launching of specific projects and activities under the agreed policies, in an effective manner and without creating excessive transactional burden. Because programmes need to be adapted to particular regional circumstances, most of the specific requirements are described in the five regional implementation annexes for Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, the northern Mediterranean and Central and Eastern Europe. As at March 2008, 102 National Action Programmes (NAPs) had been prepared and adopted. These instruments are considered to be core references for an ongoing process of planning for

poverty reduction and the sustainable development of drylands.

Efforts to combat desertification should be fully integrated into other development programme frameworks

Reversing land degradation and alleviating poverty go hand in hand. Both involve improving food security, educating and training people, strengthening the capacity of local communities, and mobilizing non-governmental organizations. Similarly, because desertification affects and is affected by environmental concerns such as loss of biological diversity and climate change, NAPs need to have a great potential to promote synergies with other programmes dealing with such issues. However, improved data at the country level and stronger recognition of the NAPs have yet to manifest this potential fully through concrete initiatives.

Programmes outline long-term strategies and are formulated with the active participation of local communities

These are essential for providing ownership and continuity for long-term programming. The

participatory process enables governments to coordinate and administer their resources more effectively while addressing the underlying socio-economic causes of desertification. These approaches pay particular attention to preventive measures and encourage a sense of commitment to sustainable practices by the very people who most depend upon the land. The programmes should be sufficiently flexible to accommodate new initiatives and local adaptations as circumstances change. In many instances, the strengthening of the capacities of key actors at the local level has proved successful in identifying and addressing challenges linked to decision making for natural resources management. The lack of a strong civil society presence in other affected states, however, continues to be a drawback in ensuring people's participation in the mainstream policy formulation and implementation process.

NAPs also specify the practical steps and measures to be taken as well as the commitments made by national governments to provide an "enabling environment"



Photo © Sabine Schmidt

Specific measures to improve the economic environment could include creating financial instruments suited to local needs or the introduction of drought-resistant crops. Other measures could include promoting research activities, drought contingency plans, and improved early warning systems. National governments, for their part, can make commitments to remove obstacles and provide support by enacting new laws or strengthening existing legislation and adopting policies that encourage sustainable development, such as the replacement of fuelwood by other energy sources. Part of the national budget must be clearly earmarked for efforts to combat desertification and drought according to national conditions and capabilities, but the NAPs are also expected to mobilize substantial financial resources from external sources. Lack of predictable programme resources and funding has slowed and impeded the implementation of NAPs. As Parties are now moving from the phase of programme preparation to that of implementation, the establishment of a country-driven mechanism to mobilize

international support to the NAP in affected country Parties is urgently called for.

Subregional and regional action programmes (SRAPs and RAPs) can help to harmonize and strengthen national programmes

These are designed through consultations among the affected countries of each region (such as Africa) and sub-region (such as West Africa). In addition to boosting the efficiency of national programmes, SRAPs and RAPs can promote joint programmes for the sustainable management of shared rivers and other cross-boundary ecosystems. The thematic programme networks which often constitute the main elements of RAPs generate spin-off effects on activities taking place at the national level, such as water management, agroforestry and monitoring, and forge each country's scientific and technical capacities. They may help in disseminating the knowledge of appropriate technologies and good practices. As at March 2008, 11 subregional and 2 regional action programmes had been launched.

The Parties identified the integration of sustainable development policies into economic policies as a challenge to be overcome

They highlighted the urgent need of inter-ministerial cooperation and for the mainstreaming of action programmes into development strategies in order to address the problem in a comprehensive manner and to avoid duplication. Given that the NAPs cut across many development sectors such as agriculture, forestry and water management, the NAPs have, at times, encouraged inter-ministerial cooperation and focused attention on inappropriate land tenure or certain trade practices not conducive to sustainable land use. Furthermore, Parties called for the insertion of Convention-related measures into bilateral and multilateral negotiations.

Relevant parts of the Convention

Articles 4, 5, 8, 9, 10, and 11, and Regional Implementation Annex for Africa Articles 4, 8, and 9



Partnership arrangements between donors and affected countries

The Convention to Combat Desertification aims to facilitate a long-term partnership for the sustainable development of vulnerable drylands ecosystem, and, to this effect, to improve the channelling and investment of official development aid

The Convention considers that its consensus approach enhances policy coherence and a more effective delivery of development aid. Developed country Parties are invited to make full use of this multilateral instrument whose potential can only be realized with their active involvement. Affected country Parties continue to review and enhance the regime of governance of natural resources in order to get maximum benefit from the limited assistance available.

The Convention builds upon the lessons of the past and expresses an international consensus for an integrated framework of action

Over the years, a great deal of insight has been gained into how to improve the process of development aid aimed at the more marginal ecosystems and lower income groups. For

example, it is generally agreed that many past aid efforts suffered because they were “supply driven” by the financing agency, handled top-down by planners, or delivered without adequate coordination at all levels. These insights are recognized in the Convention.

Partnership agreements are an essential requirement for the implementation of the Convention

As a vital part of the Regional Implementation Annex for Africa, these agreements spell out explicitly the role of each partner, including donor agencies and governments, recipient governments and non-governmental organizations (NGOs), in the implementation of the Convention in a given country. This should help to harmonize efforts and maximize the impact of assistance. Partnership agreements should be part of, or associated with, national action programmes. They could be used for many different purposes, such as mobilizing financial resources, reorienting assistance mechanisms to fit the Convention’s approach, making inventories of funding sources, or developing new models for technological cooperation.

Similar calls for coordination mechanisms are contained in all regional implementation annexes.

The consultative process aiming at the conclusion of partnership agreements is a defining moment in the implementation process for the affected country

Under the Convention, the consultations for concluding partnership agreements are initiated and managed by the recipient country in order to move from programme planning to operations. The government invites its partners to join a coordinating body, which would act as a forum for consultations. It ensures the participation of policy makers from various branches of the government, including ministries and departments responsible for finance and planning, as well as community leaders, members of non-governmental organizations, and others responsible for the resulting activities. Participants in these partnership forums work together to evaluate past efforts, identify the country’s needs, and set priorities and responses, thus maximizing options for programme coherence and synergies. The participatory approach involving the inclusion of local communities and



Photo © Daniel Chaves Aamot

collectivities would strengthen a national consensus and respond to the policy objectives of international partners who favor a more direct transfer of resources to natural resources end-users.

The mechanism to link up the recipient country with international partners is thus at the core of the implementation dynamics

International partners would include bilateral aid agencies, regional development banks, and other international agencies. These partners would need to agree on a format, round table or otherwise, to suit national circumstances on a revolving basis, and to pay due attention to monitoring their commitments. The affected country Party would also wish to integrate combating desertification into national level poverty reduction strategies, and to present its case more systematically in bilateral negotiations, with donor partners.

The developed country Parties recognize on the whole the need to mainstream and coordinate their response

The donor partners must ensure that implementation of the UNCCD deserves due attention in their respective development policy approaches, and that it is reflected in their cooperation with the developing country partners. Their support must be channeled through a clearly identified mechanism for the Convention's implementation in order to ensure predictability of resources at the national and regional levels. The donor partners, particularly developed country governments, could also develop a consultation process among themselves to structure their dialogue with recipient governments. They may wish to identify bilateral chefs de file to coordinate their activities to combat desertification. This would help them to minimize overlaps and gaps, and to evaluate and respond to requests for assistance.

Non-governmental organizations are granted an unprecedented role in this process

NGOs tend to be well-organized, close to the community level, and able to draw on a pool of skilled and experienced people. The Convention recognizes

these strengths and makes specific provisions for NGOs to become active partners in these partnership arrangements.

The need for a breakthrough in mobilizing predictable financial resources

Partnership arrangements have been launched in only few countries and have not materialized in most others, because of coordination difficulties between the recipient national focal points and the relevant government bodies responsible for the allocation of development aid as well as a lack of past experience in such arrangements. More awareness raising and commitment among donor countries and a country-driven consultative process have been pointed out by Parties as being indispensable for a breakthrough in mobilizing substantial and predictable financial resources.

Relevant parts of the Convention

Articles 10 and 14, plus Regional Implementation Annex for Africa Articles 6, 8, 9, 18, and 19.





Participatory development: A bottom-up approach to combating desertification

What role do local communities have under the Convention to Combat Desertification?

Traditional development planning has too often been “top-down”. Outside experts start the process by defining objectives, activities, and expected outputs. Sometimes they visit the area to consult local authorities, inform them of the plan, and invite the community to help in executing projects. The Convention intends to turn this approach upside down. The spirit and letter of the Convention reflect the philosophy of participatory development. Action programmes to combat desertification are to originate at the local level and to be based on genuine local participation. Shared ownership of planned initiatives is a key condition for their sustainability.

Why is local participation in project planning so important? Projects must survive once experts withdraw!

Over the past two decades, programmes designed with little reference to the perceptions and capacities of local people have often failed. Outsiders

cannot necessarily identify local needs and priorities or work out how best to meet them. Local communities have valuable experience and special knowledge and understanding of their own environment. When the responsibility for natural resource management is taken away from them, their use of land and other natural resources can become highly inefficient. The result is often land degradation. Participatory development recognizes the rights of local communities over their resources. They have a greater stake than anyone else in improving agricultural productivity while ensuring the long-term ecological balance of their fragile lands. In addition, local participation in planning and decision-making is essential for building local capacity.

Who should participate?

Those most directly involved in the management, use and benefits of a particular resource must be active participants. In the case of desertification, small farmers (both men and women), pastoralists, nomads and other local land users are clearly vital to the process, as they have the most intimate contact with the land. Local leaders – village elders, traditional chiefs, and

representatives of community groups – as well as local authorities (regional, district and municipal officials) are also essential for mobilizing action. Technical experts, researchers, non-governmental organizations (NGOs) and voluntary associations are called on to bring skills and expertise in response to locally perceived challenges.

When should local participation start and how should the process be initiated?

At the very inception of a development initiative, to begin with, the objectives and planned activities should be identified through a participatory process, which includes the local level. Once a programme has started, the participants need to make regular reviews of progress made and obstacles encountered. When each phase is completed, a consultative mechanism should help them all to be involved in evaluating its outcome and deciding on the next steps. NGOs, community based organizations (CBOs) and women’s and youth organizations have a key role to play here. It may also be necessary for the central government to delegate more decision-making authority and to share key aspects of the sustainable governance of natural



Photo © Xavier Conesa

resources with decentralized authorities closer to the local grass-roots level.

How can participation be strengthened?

The participatory process is time-consuming and labour-intensive. Many affected Party states need a stronger civil society presence. There are no short cuts. Awareness campaigns are needed, to educate the public about the Convention and about national action programmes. Agricultural extension services and NGOs can help to build up the community's capacity for "participatory programming". Local decision-making procedures may have to be adapted and strengthened. The community has to go through a long learning and confidence-building process in order to take full advantage of the new resources it now receives and manages directly. Due attention is also paid to gender issues and the involvement of the more marginalized social groups.

How is local input used at the regional and national levels?

At the local level, discussions are likely to take place in informal groups as well as in organized meetings. The results need to be carried forward to the provincial level to ensure

inter-village cooperation and coordinated management of the regional environment. At the national level, all of this input is translated into a national action programme. In addition, the national government needs to respond to local aspirations by providing an "enabling environment", including a legislative and macro policy framework conducive to drylands development, public infrastructure and technical assistance. It also serves as the central point for contact with foreign aid providers. Ideally, through the iterative NAP process, information and ideas flow back and forth continuously among the various groups.

What are the specific programme activities where input from the stakeholders is valued?

In the formulation and implementation process of the national action programmes, the focal points promote a bottom-up approach by inviting local stakeholders to submit their input. The involvement of local stakeholders is also encouraged for the workshops and forums that are being organized. These facilitate the formulation of interdisciplinary field projects, the exploration of linkages with other multilateral conventions and sustainable development policies, as well as the

establishment of partnership arrangements for the NAP implementation.

Positive results and obstacles

The strengthening of capacities for key actors at the local level proved successful in identifying and addressing challenges linked to sustainable development. The bottom-up approach of the Convention helped in strengthening relationships between governments and local communities, particularly in larger countries. It also favored the decentralized involvement of stakeholders and natural resources end-users in the development process. The lack of a strong civil society presence in a number of affected states, or, in certain cases, the troubled state of public security, has been a drawback to ensuring people's participation in the mainstream policy and decision-making process. Greater awareness raising is necessary, in order to encourage the further participation of NGOs, CBOs and women's and youth organizations.

Relevant parts of the Convention

Articles 3, 5, 9 and 10, plus Regional Implementation Annex for Africa Articles 6 and 9.



The role of science and technology

The Convention to Combat Desertification has established a Committee on Science and Technology (CST)

Composed of government representatives, a **Committee on Science and Technology (CST)** provides advice to the Conference of the Parties (COP) on scientific and technological matters relevant to combating desertification and mitigating the effects of drought. By decision 13/COP.8, the operations of the CST shall be reshaped in line with the 10-year strategic plan and framework to enhance the implementation of the Convention (2008-2018). Future sessions of the CST shall be organized in a predominantly scientific and technical conference-style format, bringing on board scientific expertise from the international community to support the work of the CST.

Consistent with the provisions of the Convention, the functions of the CST are as follows

It provides advice to the COP on scientific and technological matters, and collects, analyses and reviews relevant data. In addition, it promotes cooperation in the field of

combating desertification and mitigating the effects of drought through appropriate regional, sub-regional, and national institutions, and in particular through activities in research and development, which contribute to increased knowledge of the processes that contribute to land degradation, desertification and drought as well as their impacts. It also contributes to distinguishing causal factors, both natural and human, with a view to combating desertification and achieving improved land productivity as well as the sustainable use and management of resources.

The Convention promotes international cooperation in scientific research and systematic observation

The CST serves as a liaison between the COP and the scientific community by seeking the cooperation of, and utilizing the services and information provided by, competent bodies or agencies - national, international and non-governmental. The CST keeps itself informed of the activities of the scientific advisory bodies of the other Conventions and coordinates the activities of the COP in order to avoid duplication and optimize efficiency.

In the framework of the CST activities, new technologies and know-how are being developed, transferred to affected countries, and adapted to local circumstances

Modern communications, satellite imagery, and genetic engineering are only a few examples of modern tools that can help in combating desertification. Better weather forecasts and alerts can help to maintain or increase the land's productivity while improving food security and local living conditions. So too can new plant and animal varieties that are resistant to pests, diseases, and other dryland stresses. Photovoltaic cells and wind energy may reduce the consumption of scarce fuel wood and thus deforestation. For all these reasons, the Convention commits Parties to encourage technological cooperation. It calls for the promotion and financing of the transfer, acquisition, adaptation, and development of technologies that help to combat desertification or cope with its effects. These technologies should also be environmentally sound, economically viable, and socially acceptable.

Many related international organizations and the CST have identified traditional knowledge

and know-how as very important means of combating desertification and mitigating the effects of drought

People have been coping with the degradation of land and other natural resources since the introduction of agricultural practices thousands of years ago. Many local populations have developed techniques for managing soil and water, domesticating plants and animals, and even for forecasting the weather. Examples include the terracing of steep slopes in the Andes and Himalayas and the use of irrigation systems around the world since prehistoric times. Many of these traditional technologies are still in use and have proved their effectiveness over centuries. Too often, however, changes in economic, ecological, or cultural conditions have led people to abandon techniques that could still be valuable today. The Convention states, therefore, that traditional and local technologies and know-how should be protected, promoted and used.

The COP works to draw scientific and technology researchers into a global network to support the Convention

Under the leadership of the COP, the CST has surveyed and identified existing networks, institutions, agencies, and other bodies working on issues relevant to desertification, and has established a database based on their responses. It evaluates the principal potential units in certain regions and subregions through a pilot in-



Photo © Norbert Seebach

depth survey, and then replicates it in other regions in order to recommend to the COP ways and means of facilitating and strengthening networking of the units at the local, national and other levels, with a view to promoting a global research network committed to supporting the Convention. Scientists worldwide are always encouraged to contribute with their knowledge and research results to this international effort.

Capacity building, education and training are essential to help affected developing countries in combating desertification at local level

Developing countries often suffer from a scarcity of domestic skills, expertise, libraries, and research centres. Many also need improved hydrological and meteorological services. The Convention encourages developed countries to support capacity-building efforts, which will enable developing countries to combat desertification more effectively through science and technology.

In order to improve the efficiency and effectiveness of the CST, the COP established a Group of Experts (GoE)

Until its terms of reference concluded in 2007, the GoE played an important institutional role, providing the CST with information on the current knowledge, the extent and the impact, the possible scenarios and the policy implications on various themes assigned in its work programme. Its achievements included developments of: communication strategies between the activities of the GoE, end-users and the research community; guidelines to update the world atlas of desertification; an integrative assessment methodology for poverty and land degradation; recommendations on ways to eliminate perceived gaps between biophysical, socio-economic and cultural knowledge and activities to combat desertification; methodologies for assessment of desertification; guidelines for both short-term and long-term early warning systems; and common benchmark and indicator systems for the monitoring and assessment of desertification.

Relevant parts of the Convention

Articles 8, 16, 17, 18, 24 and 25



Financing to combat desertification

How much money is needed to combat desertification?

It is difficult to estimate just how much money will be needed to achieve the objective of the Convention to Combat Desertification. The cost will depend largely on the contents of the National Action Programmes (NAPs) through which affected countries will seek to implement the Convention. The United Nations Environment Programme (UNEP) estimates that an effective 20-year global effort would cost US \$ 10-22 billion per year. To put this estimate in perspective, UNEP also calculates that desertification currently causes affected countries to forego some US\$ 42 billion in income per year.

What are the major sources of funding?

The largest source of funds is the affected countries themselves. The largest external source for Africa is bilateral official development assistance provided on grant or concessional terms. Multilateral bank loans made on a commercial basis are the major external source of funds for Latin America and Asia. Foreign

private investment is also important in these regions, although it has been largely untapped in Africa. The World Bank, the International Fund for Agricultural Development (IFAD), regional development banks, and other international financial institutions also play a prominent role, as do United Nations organizations and agencies. Non-governmental organizations (NGOs) are another significant source, particularly in Africa. Since the adoption of Land degradation as a GEF Focal area and ensuing Operational Programme on sustainable land management (OP.15) in 2003, the implementation of the Convention can rely on predictable financial resources never availed before. The GEF is therefore one of major sources of funding.

What financial commitments do the Parties make?

Affected developing countries are expected to allocate adequate resources to the effective implementation of the Convention, given their circumstances and capabilities. Developed countries are to provide "substantial financial resources and other forms of support", including grants and

concessional loans, through both bilateral and multilateral channels. They also pledge to seek new and additional funding through the Global Environment Facility (GEF) for activities to combat desertification under its new OP.15. In addition to funding land degradation projects, this programme also envisages to fund the elaboration of action programmes and national reports under the Convention, through capacity building components. Action programmes have however proven to be costly. In this regard, collaborations with private sector and non-governmental organizations for implementation of actions such as debt swaps and other innovative means of reducing external debt burdens also need to be promoted. Over and above these commitments, any Party can voluntarily provide financial resources to affected developing countries.

How will the flow of funding from donors to affected countries be coordinated in order to ensure maximum effectiveness?

At its first session in October 1997, the Conference of the Parties identified IFAD as the Host Institution of the Global



Photo © Kushal Gangopadhyay

Mechanism; its role is to promote actions leading to the mobilization and the channelling of substantial resources to affected developing countries, including the transfer of technology. With the new GEF focal area, the role of the Global Mechanism has been further strengthened as a financial broker, particularly regarding the co-funding resources required for GEF intervention.

How will funding be channeled to the projects and activities where it is most needed?

The Convention encourages the allocation of funds using an integrated "bottom-up" approach involving the full participation of local communities. The Regional Implementation Annex for Africa states that recipient governments establish policies and procedures for channelling resources more effectively to groups at the local level. They enable non-governmental organizations to assume an unprecedented role in ensuring that local communities obtain the external resources they need to carry out their own programmes. Governments also

provide a macroeconomic framework conducive to mobilizing financial resources and ensure that the financial package is fully integrated into their overall national development programme.

Relevant parts of the Convention

Articles 5, 6, 13, 20 and 21, plus Regional Implementation Annexes for Africa (Article 15), Latin America and the Caribbean (Article 6), Asia (Article 7), and Central and Eastern Europe (Article 7)





Institutions and procedures of the Convention

The Convention to Combat Desertification was negotiated under the auspices of the United Nations

In June 1992, the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), also known as the Rio Earth Summit, recommended that the United Nations General Assembly establish an Intergovernmental Negotiating Committee for a Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification (INCD) in order to prepare a convention to combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa. The Committee held five preparatory sessions before adopting the Convention on 17 June 1994 in Paris.

The Convention entered into force on 26 December 1996, 90 days after it had been ratified by 50 countries

As of March 2008, there are 193 Parties to the Convention. After a government's representatives have signed the Convention, the designated legislative body ratifies. The government then sends its instrument of ratification to the United Nations in New York, which acts as the Depository. Countries which have

ratified, accepted, approved or acceded to the Convention become Parties and are legally responsible for carrying out their treaty commitments 90 days after having deposited their instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

While only national governments which ratify/accede to the Convention can become Parties to the UNCCD, other bodies and organizations can also participate in the Conference of the Parties (COP) as observers

International conventions are legal agreements among sovereign countries. However, this Convention makes special provision for national and international agencies and qualified NGOs to attend the meetings of the COP and to contribute to its work. NGOs have not only played a prominent role in the Convention process, but they continue to raise public awareness and to lobby parliamentarians for effective implementation of the Convention. Such international and regional organizations provide crucial information, expertise, contacts, and research and managerial capabilities.

The Conference of the Parties periodically reviews the implementation of the Convention

The COP was established by the Convention as the supreme decision-making body; it comprises ratifying governments and regional economic integration organizations, such as the European Union. Up to the year 2008, the COP had held eight sessions; it has been meeting biennially since 2001. One of the main functions of the COP is to review reports submitted by the Parties detailing how they are carrying out their commitments. The COP then makes recommendations on the basis of these reports. It also has the power to make amendments to the Convention or to adopt new annexes, such as additional regional implementation annexes. In this way, the COP can guide the Convention as global circumstances and national needs change. To assist the COP, the Convention provides for subsidiary bodies and allows the COP to establish additional ones if necessary.

The Committee on Science and Technology (CST) advises the COP on scientific and technological matters

The CST is a subsidiary body of the COP and provides it with information and advice on scientific and technological matters relating to combating desertification and mitigating the effects of drought using the most up-to-date scientific knowledge.



Photo © UNCCD secretariat

The CST is multi-disciplinary, open to the participation of the Parties and composed of government representatives with relevant expertise. It reports regularly to the COP on its work, including at each of the sessions of the COP. The bureau of the CST is responsible for follow-up of the work of the Convention between COP sessions.

The Committee for the Review of the Implementation of the Convention (CRIC) assists the COP in regularly reviewing the implementation of the Convention

An official procedure for reviewing progress made in the implementation of the Convention was first decided upon at COP 5. Parties agreed to establish a subsidiary body tasked to consider reports from country Parties and observers, as well as information and advice from the CST and the Global Mechanism, and to report to the COP on ways and means to enhance the implementation of the Convention at national, sub-regional and regional levels. The CRIC holds its yearly sessions during and between the ordinary sessions of the COP. The review process leading to the CRIC, which includes input at sub-regional and regional levels, will

allow it to draw conclusions and to propose to the COP concrete recommendations on further steps in the implementation of the Convention. The review is to be conducted along thematic lines decided by the COP, with due regard to geographic dimensions. The mandate and functions of the CRIC, as well as its schedule of meetings, are subject to renewal at COP 9 where the new Terms of Reference of the CRIC is expected in light of the 10-year strategic plan and framework to enhance the implementation of the Convention (2008-2018), adopted at COP 8.

The COP is supported by a secretariat

As do other conventions' secretariats, the UNCCD secretariat provides services to the COP by arranging its meetings, preparing documents, coordinating with other relevant bodies, compiling and transmitting information, and facilitating consultations and other actions. It also, on request, provides assistance to affected developing countries, in the compilation and communication of information required under the Convention. Affected developing countries can also rely on the secretariat for information or

advice on, for example, organizing their national consultation processes.

Global Mechanism (GM) helps the COP to promote funding for Convention-related activities and programmes

This mechanism was not conceived to raise or administer funds. Instead, the GM encourages and assists donors, recipients, development banks, NGOs, and others to mobilize funds and to channel them to where they are most needed. It seeks to promote greater coordination among existing sources of funding, and greater efficiency and effectiveness in the use of funds. The GM is under the authority of the COP, which periodically reviews its policies, operational modalities and activities. Furthermore, by decision 3/ COP.8, the secretariat was requested to prepare a draft joint work programme (JWP) with the GM, which would assist the two entities to ensure consistency and complementarity in the delivery of services, and to strengthen their coordination and cooperation. The GM is hosted by the International Fund for Agricultural Development (IFAD) in Rome, Italy.



Desertification, global change and sustainable development

The Convention to Combat Desertification cannot be viewed in isolation from other efforts to promote sustainable development

The Convention text refers frequently to sustainable development, climate change, biological diversity, water resources, energy sources, food security, and socio-economic factors. The interactions between these issues and desertification are often not fully understood, but they are clearly important. The Convention therefore emphasizes the need to coordinate desertification-related activities with the research efforts and response strategies inspired by these other concerns.

Efforts to combat desertification complement efforts to protect biological diversity

While many people tend to identify the issue of biodiversity with tropical rain forests, dryland ecosystems also contain a rich biota, including plant and animal species not found elsewhere. Many of humanity's

most important food crops, such as barley and sorghum, are originated in drylands. Though disappearing fast, indigenous varieties remain a vital resource for plant breeders because of their resistance to stresses such as disease. Dryland species also provide drugs, resins, waxes, oils, and other commercial products. For example, drylands supply one third of the plant-derived drugs in the US. Finally, drylands provide critical habitats for wildlife, including large mammals and migratory birds. These habitats are particularly vulnerable to land degradation.

Land degradation affects the quantity and quality of freshwater supplies

Drought and desertification are associated with lower water levels in rivers, lakes, and aquifers. For example, unsustainable irrigation practices can dry the rivers that feed large lakes; the Aral Sea and Lake Chad have both seen their shorelines shrink dramatically in this way. Water crises are raising political tensions in many parts of the world, particularly where rivers and lakes are shared across borders. Land degradation is also

a leading source of land-based pollution for the oceans, as polluted sediment and water washes down major rivers.

Natural climate variations can strongly affect drought patterns

Currently the best understood link between global climate variability and drought involves sea-surface temperature patterns. Research into such climate patterns is starting to improve seasonal rainfall predictions. Efforts to strengthen predictions are an important part of national action programmes to combat desertification and will help dryland farmers and herders to prepare better for droughts. **Desertification also impacts upon the climate, with land degradation and related loss of vegetation leading to increased emissions and reduced carbon sink.** Restoration of dryland conditions could therefore have a major impact on global climate patterns.

Climate change and desertification

Climate change is a major contributing factor to desertification. An increase in



Photo © Tongjing Lu

weather extremes such as droughts and heavy rains as a result of global warming will lead to further land degradation. This in turn will exacerbate the ongoing problems of poverty, forced migration and conflicts. While desertification is already responsible for significant forced migration, more than a billion people - one in seven of the current world population - could be forced from their homes between now and 2050 if climate change worsens.

Desertification may temporarily affect climate change

Land degradation tends to reduce surface moisture. Because less water is available for the sun's energy to evaporate, more energy is left over for warming the ground and, as a result, the lower atmosphere. Meanwhile, wind erosion in drylands releases dust

and other particulates into the atmosphere. By absorbing the sun's rays or reflecting them back out into space, they may help to cool the Earth's surface. However, the energy they absorb can heat the lower atmosphere and in this way reduce temperature differences between the atmosphere's vertical layers; this can lead to fewer rain-showers and thus drier land. Finally, the periodic burning of arid and semi-arid grasslands, often associated with unsustainable slash-and-burn agriculture, emits greenhouse gases. So does the unsustainable use of fuel-wood and charcoal, a major cause of land degradation. On the other hand, reforestation is likely to have a cooling effect and is also, of course, an important way to combat land degradation.

A common approach to tackling desertification and climate change will have multiple advantages

It particularly benefits the poor in the world's drylands who struggle to secure a livelihood from the land and who are suffering most from the double blow of desertification and climate change.

Desertification exacerbates poverty and political instability

It contributes significantly to water scarcity, food crisis, and internal displacement of people, mass migration, and social breakdown. This is a recipe for political instability, for tensions between neighboring countries, and even for armed conflict. Evidence is mounting that there is often a strong correlation between civil strife and conflict on the one hand and environmental factors such as desertification on the other.





Combating desertification in Africa

Desertification has its greatest impact in Africa

Two thirds of the continent is desert or drylands. There are extensive agricultural drylands, almost three quarters of which are already degraded to some degree. The region is afflicted by frequent and severe droughts. Many African countries are landlocked, have widespread poverty, need external assistance, and depend heavily on natural resources for subsistence. They have difficult socio-economic conditions, insufficient institutional and legal frameworks, incomplete infrastructure, and weak scientific, technical, and educational capacities. These difficult circumstances explain why African countries have put so much effort into convincing the international community of the need for a "Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa".

Africa's desertification is strongly linked to poverty, migration, and food security

In many African countries, combating desertification and promoting development are virtually one and the same due to the social and economic importance of natural resources and agriculture. When people live in poverty, they have little choice

but to over-exploit the land. When the land eventually becomes uneconomic to farm, these people are often forced into internal and cross-border migrations, which in turn can further strain the environment and cause social and political tensions and conflicts. The link with migration was important to the international community's recognition of desertification as a truly global problem, like climate change or biodiversity loss. Food security can ultimately be put at risk when people already living on the edge face severe droughts and other environmental disasters.

The Regional Implementation Annex for Africa outlines a strategy for action in the African continent

This Annex is the most detailed and comprehensive of all the regional annexes to the Convention. Its proposals for National Action Programmes benefited from early attention when Parties adopted a Resolution on urgent measures for Africa which entered into force in June 1994, some two and a half years before the Convention itself.

Implementation of NAPs can be successful only if consultations are continuous

During the past years, most African countries have organized national awareness-raising seminars in order to launch the process of

formulation of their National Action Programmes (NAPs).

By February 2008, 41 African countries finalized, validated and adopted their National Action Programmes. These countries are: Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Congo, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Senegal, South Africa, Sudan, Swaziland, the United Republic of Tanzania, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe. The following countries are still on the process of formulating their NAP: Angola, Central Africa Republic, Comoros, Côte d'Ivoire, Liberia, Mauritius, Namibia, Sao Tome & Principe, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone and Somalia. The preparation of NAPs is a dynamic ongoing process and the status of each country is subject to change over time. In order to be successfully implemented, the NAPs need to be integrated into other national strategies for sustainable development, such as the Poverty Reduction Strategy and consultative processes need to be launched, aiming at the setting up of partnership agreements. The participation of non-governmental organizations (NGOs) and of the scientific community is particularly

important and their valuable contribution to the process has been widely recognized.

Five Subregional Action Programmes (SRAPs) have also been finalized

The existing subregional organizations in five subregions of Africa entrusted with coordinating these programmes are the Arab Maghreb Union (AMU) for northern Africa, the Permanent Inter- State Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS) for the west, the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) for the east, the Southern African Development Community (SADC) for the south and the Commission des Forêts de l'Afrique Centrale (COMIFAC) for Central Africa. While community-based organizations are very important actors in the process of formulating NAPs, such specialized intergovernmental organizations feature as main partners in designing SRAPs. When possible, these programmes seek synergies with other regional objectives. For example, a project for connecting subregional organizations to each other and to their respective member States via electronic systems will contribute to the strengthening of the regional communications network.

A Regional Action Programme (RAP) is also being developed

A Regional Coordination Unit (RCU) hosted by the African Development Bank in Tunis has been operational since early 2000, its main purpose is to support the implementation of the RAP. Further to the recommendations of the 1997 Pan African Conference on the Implementation of the UNCCD, seven thematic workshops were organized in 1998-1999 to look into prospects for establishing Thematic Programme Networks



Photo © Roberto Neumiller

(TPNs) in order to promote the integrated management of international river, lake, and hydrogeological basins (TPN 1); agroforestry and soil conservation (TPN 2); rangelands use and fodder crops (TPN 3); ecological monitoring, natural resources mapping, remote sensing, and early warning systems (TPN 4); new and renewable energy sources and technologies (TPN 5); sustainable agricultural farming systems (TPN 6). The TPNs are coordinated by a focal point representing an African institution specialized in the respective thematic area. By now, all TPNs have been launched and priority activities are under implementation.

African countries have moved from planning to action, but the real work still lies ahead

To succeed, affected countries must ensure that combating desertification is given top priority and that NAPs are effectively linked to poverty reduction and investment strategies. They must actively promote an enabling environment by adopting appropriate legal, political, economic, financial, and social measures. For instance, they may need to change their rules on land use and ownership, further decentralize government administration and strengthen political rights at the local level. Meanwhile, external partners will

have to prove themselves fully committed to the principles of the Convention by entering into productive partnerships with affected countries. Greater efforts, including capacity-building and financial support, are also needed to enable NGOs and civil society to remain active throughout the implementation stage.

Some national partnership platforms in support to the implementation of the NAP are being experimented through pilot initiatives such as the Country Pilot Partnerships (CPP) promoted by the GEF and its implementing agencies in Burkina Faso, Namibia and Ethiopia, and the TerrAfrica initiative facilitated by the World Bank in cooperation with the NEPAD Secretariat.

With the adoption of the 10 Years Strategic Plan and Framework to enhance the implementation of the Convention, which gives strategic directions and operational objectives to be achieved by 2018, a new momentum seems to take place, which could be ceased by the African Country Parties and their partners to enhance the implementation of the NAPs.

Relevant parts of the Convention

Annex I: Regional Implementation Annex for Africa





Combating desertification in Asia

Desertification manifests itself in many different forms across the vast Asian continent

Out of a total land area of 4.3 billion hectares, Asia contains some 1.7 billion hectares of arid, semi-arid, and dry sub-humid land reaching from the Mediterranean coast to the shores of the Pacific. Degraded areas include expanding deserts in China, India, Iran, Mongolia and Pakistan, the sand dunes of Syria, the steeply eroded mountain slopes of Nepal, and the deforested and overgrazed highlands of the Lao People's Democratic Republic. Asia, in terms of the number of people affected by desertification and drought, is the most severely affected continent.

The Convention's Regional Implementation Annex for Asia recognizes particular circumstances and needs of each country

It calls for activities at the national, sub-regional, and regional levels in the form of coordinated and integrated action programmes. The integration of activities directly related to the combat against desertification into other environmental and sustainable development strategies is meant to maximize the output and benefit for affected country

Parties. Therefore, action at the local level should combine the fight against desertification with efforts to alleviate rural poverty.

29 Asian and Pacific countries have adopted their National Action Programmes (NAPs) as of March 2008

These countries are: China, Fiji, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Democratic People's Republic of Korea, Kyrgyzstan, Lebanon, Lao People's Democratic Republic, Mongolia, Myanmar, Nepal, Niue, Oman, Pakistan, Palau, Philippines, Sri Lanka, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Tuvalu, United Arab Emirates, Uzbekistan, Viet Nam, Yemen and Saudi Arabia. The other affected developing countries in the Asia and Pacific region are at various stages of NAP formulation. The preparation of NAPs is a dynamic ongoing process and the status of each country is subject to change over time. The Convention's "bottom-up" approach, whereby existing desertification programmes are reviewed by the stakeholders, including non-governmental organizations (NGOs), local authorities, and community leaders, was generally adopted in formulating NAPs. Mainstreaming the NAPs in order to enhance their effective implementation is another important consideration in this regard.

Regional activities have been launched through Thematic Programme Networks (TPNs)

Based on the principles contained in the Convention to Combat Desertification and its regional annex for Asia, a number of regional meetings introduced an approach that has become central to regional cooperation in Asia: the TPNs. Each network deals with one core aspect, which is either a cause or an effect of desertification, and aims at providing and promoting regional solutions through improved and innovative regional cooperation and exchange of information. The networks have evolved following the 1997 Beijing Ministerial Conference, the 1998 Muscat meeting and the 1997 Tashkent Conference. The implementation of the NAPs is advanced by the promotion of regional cooperation and capacity-building at national and sub-regional levels through the six TPNs adopted at the Beijing Ministerial Conference. These are TPN1 - Desertification monitoring and assessment (hosted by China and launched in July 1999), TPN2 - Agroforestry and soil conservation (hosted by India and launched in May 2000), TPN3 - Rangeland management and fixation of shifting sand dunes (hosted by Iran and launched in May 2001), TPN4 - Water resources management for arid-land agriculture (hosted by Syria and launched in July 2002),

TPN5 - Strengthening capacities for drought impact mitigation and combating desertification (hosted by Mongolia and launched in July 2003), and TPN6 - Assistance for the implementation of integrated local area development programmes (hosted by Pakistan and launched in June 2004).

West Asian countries are implementing a subregional action programme (SRAP) to strengthen their activities under the Convention

In response to the sub-region's needs, West Asian country Parties and interested organizations formulated and implemented activities promoting intergovernmental cooperation within the sub-region. The activities focused on two main areas: water resources and vegetative cover. Following the adoption of the 10-year strategic plan and framework to enhance the implementation of the Convention (2008-2018) at COP 8, countries in the sub-region decided to review operational modalities and overall expectation of the SRAP in order to harmonize outputs and future activities. The review is expected to take place in 2008 and will ensure that sub-regional activities are in line with National Action Programmes (NAPs) while complying with broader developmental goals identified by The Strategy.

Severely affected or affected by drought and desertification, all Central Asian countries are Parties to the UNCCD

Since the early 1990s, all countries of the sub-region (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan) have been undergoing a process of radical socio-economic reforms, including democratization, decentralization, privatization, improved access to information

for ordinary citizens, and land reforms, which have direct or indirect implications for environmental protection, including combating desertification. The Central Asian countries have adopted measures that are conducive to the effective implementation of the Convention. In 2003, they adopted the Sub-Regional Action Programme (SRAP/CD). Activities have been undertaken to implement SRAP/CD through national projects under the Central Asian Countries Initiative for Land Management (CACILM), which was prepared in parallel to the SRAP/CD process as a 10-year programme of country-driven action and resource mobilization. The objective of CACILM is to ensure a coordinated and integrated approach to sustainable land management in CA states for the period 2006-2016. Since 2007, activities have been undertaken to establish a Drought Management Center for Central Asia in cooperation with the UNCCD secretariat, OSCE and WMO.

East, Southeast, and South Asia has a very varied climate and contain much biological diversity

Nevertheless, the magnitude of soil erosion and the resulting loss of biodiversity and agricultural productivity are increasingly threatening both the ecological and the economic base of many

countries. Concerted action is needed to halt the emerging trends. The 1996 Delhi Conference and the 1997 Beijing Ministerial Conference endorsed the principle of cooperation across climatically different regions in order to prevent further land degradation. South Asian Country Parties adopted SRAP in Sri Lanka in July 2004, and Southeast Asian Country Parties adopted SRAP in Bonn (at COP4) in 2005.

The Pacific Island Country Parties are unique in their problems and the ways to address those problems

Drought preparedness, land productivity and vulnerability to natural disasters and economic shocks are the main issues confronting them in relation to sustainable development, including this Convention. Since 2007, 14 Pacific countries and Timor-Leste are implementing activities on "Land degradation rehabilitation and drought effect mitigation" in cooperation with the UNCCD and the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela, aimed at supporting grassroots activities such as controlling deforestation, re-vegetating deforested lands and preventing soil from erosion as well as water harvesting.

Relevant parts of the Convention
Annex II: Regional Implementation
Annex for Asia



Photo © Ferdinand Singh



Combating desertification in Latin America and the Caribbean

Although well known for its rain forests, Latin America and the Caribbean is actually about one-quarter desert and drylands (20,533,000 km²)

The hyper-arid deserts of the Pacific coast stretch from southern Ecuador, the entire Peruvian shoreline and northern Chile. Further inland, at altitudes of 3,000-4,500 meters, high and dry plains (Altiplano) of the Andean mountains cover large areas of Peru, Bolivia, Chile, and Argentina. To the east of the Andes, an extensive arid region extends from Chaco's northern reaches in Paraguay to Patagonia in southern Argentina. Northeastern Brazil contains semi-arid zones dominated by tropical savannahs. Large parts of Colombia and Venezuela are highly degraded. In Dominican Republic, Cuba, Haiti and Jamaica, there are arid zones, as erosion and water shortages are noticeably intensifying in the Eastern Caribbean. Most of Mexico is arid and semi-arid, mainly in the north. Land degradation and severe droughts make the Central American countries vulnerable to extreme events, delaying their sustainable development.

Poverty and pressure on land resources are causing land degradation in many of these areas

A region with 465 million inhabitants, around 110 million live below the poverty line.

The Convention to Combat Desertification has strong political support

All countries in the region have already joined the Convention and its issues are becoming part and parcel of the national agendas on sustainable development and combating poverty. Non-governmental organizations (NGOs) have organized efforts through the International network of NGOs, RIOD (Réseau Internationale d'Organisations Non Gouvernementales sur la Désertification). The network has four sub-regional focal points and one regional focal point. While RIOD's contribution is important, more needs to be done to attract NGO participation at the national, sub-regional, and regional levels.

The Regional Annex for Latin America and the Caribbean strongly emphasizes the need for sustainable development

Unsustainable practices include excessive irrigation and inappropriate agricultural practices, inadequate legal issues, inappropriate use of soil, fertilizers and pesticides, overgrazing, and intensive exploitation of forests. Frequent droughts and forest fires along with these practices lead to land degradation. Indeed, the sharp losses of ecosystem productivity reduce overall economic productivity and livelihoods.

National Action Programmes (NAPs) have been formulated in most countries of the region

There are 23 adopted National Action Programmes in Latin America and the Caribbean. It is expected that the majority of the remaining ten would be finalized and adopted by the end of 2008. The bottom-up process is being finalized with the involvement of all relevant stakeholders, including civil society. Although this process benefits from the region's strong scientific resources, much remains to be done, at institutional and technical levels, to increase and strengthen the capacities of a promising critical mass in the region that would allow effective progress and concrete achievements. Streamlining of



Photo © Pablo Oliveri

National Action Programmes in relation to other national environment and sustainable development is now a top priority for many countries in the region.

The Regional Action Programme first officially adopted in 1998 is constantly being reviewed to ensure it meets the needs of the times as regards the implementation process

The last major review of the programme included six regional thematic programme networks (TPNs) covering the following areas: Benchmarks and indicators of desertification and drought (TPN1); Information Network on Desertification and Drought (DESELAC) (TPN2); Integrated water resources management (TPN3); Promotion of agro-forestry (TPN4); Promotion of traditional knowledge (TPN5); and Sustainable renewable energy (TPN6). A Regional Unit (RCU) was established in Mexico City in the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). The coordination level has been

facilitated and further enhanced, aimed at, inter alia, promoting exchange of information and experiences; technical, scientific and financial collaboration, partnerships with cooperation agents as well as providing valuable feedback to activities and projects derived from NAPs, SRAPs and the RAP. A major review of the Regional Action Programme is presently being in view of the 10-year strategic plan and framework to enhance the implementation of the Convention (2008-2018), adopted at COP 8.

Several subregional programmes have also been launched and further implemented

The SRAP of Gran Chaco Americano (Argentina, Bolivia and Paraguay) is implementing sound actions on socio-economics and environmental degradation. The SRAP for Puna Americana, (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador and Peru) has become an important tool to link NAP processes at the sub-regional level, while promoting

sustainable development, also through awareness raising and increased stakeholder participation in related processes. The SRAPs of Hispaniola (Dominican Republic and Haiti) and Colombia and Venezuela, have shown progress, one in the trans-boundary area and both in institutional cooperation; strengthening of these actions is underway. Apart from the existing SRAPs, the Caribbean and the Meso America sub-regions are presently working on developing their own that covers 16 countries. The SRAP is of vital importance, as this sub-region needs to cooperate more closely in they are to have an efficacious implementation process. As regards Meso America, the process is progressing more smoothly as they have recently be given some technical and financial support to help accomplish this task.

Relevant parts of the Convention

Annex III: Regional Implementation Annex for Latin America and the Caribbean



United Nations
Convention to Combat Desertification

Combating desertification in the Northern Mediterranean

The Northern Mediterranean region is a complex mosaic of diversified landscapes

It has been settled and cultivated for millennia by various cultures and civilizations. Much of the region is semi-arid and subject to seasonal droughts with high rainfall variability or sudden intense downpours. The region is also characterized by high population densities, heavy concentrations of industry, and intensive agriculture. Although people here often use the term "desert", they do so in the sense of wilderness, lack of population, or isolation and less in term of sand dunes.

Mediterranean land degradation is often linked to poor agricultural practices

Soils become salinized, dry, sterile, and unproductive in response to a combination of natural hazards - droughts, floods, forest fires - and human-controlled activities, notably overtilting and overgrazing. The situation has worsen by the social and economic crisis in traditional agriculture in recent years and the resulting migration of people from rural to urban areas. The result is abandoned land, particularly on

marginal and easily eroded hillsides, and weakened agricultural planning and land management.

The modern economy is also contributing to the problem

Fertilizers, pesticides, irrigation, contamination by heavy metals, and the introduction of exotic (and invasive) plant species are undermining the long-term health of the region's soils. Physical changes imposed on watercourses by the construction of reservoirs, the canalization of rivers, and the drainage of wetlands are affecting land quality. Meanwhile, groundwater levels are declining widely, resulting among other things in salt-water intrusion into coastal aquifers. Some 80 percent of the region's available freshwater is used for irrigation. The dramatic and continuing growth of industry, tourism, intensive agriculture, and other modern economic activities along the coastlines is placing particular stress on coastal areas. In addition, in the last five years the effects of climate change, such as drastic decrease of rainfall and consequent important drought, have had a very serious impact on the region's land and its productivity.

Among the Northern Mediterranean affected country Parties, seven are members of the European Union

The Fourth Regional Implementation Annex offers concrete opportunities for strengthening mutual cooperation and more effective national action. The European Community, France, Monaco and Israel are participating in the sub-regional and regional processes as observers.

The Sub-Regional group of Greece, Italy, Portugal, Spain and Turkey

has worked together for several years on sub-regional activities. Since 2004, a regional consultative mechanism has been established with the assistance of the UNCCD secretariat covering now under the annex IV all Northern Mediterranean countries together. At the regional level, activities are being promoted and undertaken particularly through the establishment of regional thematic networks for scientific cooperation, the organization of workshop on technology and know-how, the development of mechanisms for exchanges of information and documentation and the organization of regional training courses. In addition to



Photo © Lucio do Rosario

intraregional cooperation, the Fourth Annex calls on its members to cooperate with other regions and sub-regions, Central and Eastern Europe for example, and particularly with the developing countries of Northern Africa. A Drought Management Center for South Eastern Europe in the context of the UNCCD is currently being hosted by Slovenia and involving countries from both annexes IV and V.

The Annex also stimulates action at national level

As of February 2008, Italy, Greece, Portugal, Spain and Turkey adopted their National Action Programmes (NAPs) to combat desertification. Other affected countries from Northern Mediterranean are in the process of elaboration or finalization of their NAPs.

Desertification research is receiving a renewed emphasis

A number of research programmes are developed, targeting among others the end-users, assessing the impact of climate and weather on land

and soil degradation in the region. EU members are also investing more in the systematic monitoring of land degradation, the development of indicators, although there is still a need for better coordination of the collection, analysis, and exchange of data, including exchange of data with countries outside the EU. In addition, there is a need for more technical and scientific cooperation on research into the socio-economic consequences of land degradation and the cost of inaction.

A number of other policies also have great potential, including the soil strategy of EU

It is widely recognized that one priority for the region should be protecting land that has not yet been significantly degraded. An effective and "integrated" approach to water management at the local, national, and regional levels needs to address simultaneously traditional and intensive agriculture, industry, employment, biodiversity, freshwater resources, water pollution, and the special

problems of coastal areas. Synergies with other treaties should be explored. Traditional knowledge and know-how need to be conserved and used. The development, adaptation, and transfer of technologies to combat land degradation and protect soil, which are environmentally sound, economically viable, and socially acceptable should be more actively promoted. Finally, local communities and non-governmental organizations are being increasingly engaged. The 10-year strategic plan and framework to enhance the implementation of the Convention (1008-2018), adopted at COP 8, will guide the action of all regional stakeholders in putting into practice those policies and marks a important step towards the achievement of their objectives.

Relevant parts of the Convention

Annex IV: Regional Implementation Annex for the Northern Mediterranean.



Combating land degradation/desertification in Central and Eastern Europe

Land degradation desertification and drought affect many countries of Central and Eastern Europe (CEE)

Desertification and land degradation are not only a problem of the developing countries, as developed countries are not less affected. Although the process and degree of soil degradation in CEE region is varying considerably from country to country, soil degradation is an issue for the whole Europe. In CEE, affected countries are: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Hungary, Latvia, Moldova, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia and Ukraine.

The region's particular concerns are addressed by the Convention's fifth regional implementation Annex

The Annex sets out guidelines and arrangements for implementing the Convention in Central and Eastern Europe. It was adopted by the fourth session of the Conference of the Parties in 2000 and it entered

into force on 6 September 2001. All CEE countries except one have acceded to the Convention. Several CEE countries are members of the European Union and some countries are emerging donors. The particular features of the CEE region, as defined in Annex V, which apply in varying degrees to the affected country Parties of the region, include specific problems and challenges related to the process of economic transition, the variety of forms of land degradation in the different ecosystems, crisis conditions in agriculture due to soil depletion in arable lands and other stresses. Inappropriate irrigation and the excessive exploitation of water resources are contributing to chemical pollution, salinization and the exhaustion of aquifers. Also deforestation, due to pollution stress and frequent forest fires, remains a serious problem.

The fifth regional implementation Annex for CEE countries also offers concrete opportunities for strengthening regional and sub-regional cooperation

Because economic activities and ecosystems are linked across borders, countries can benefit

from coordinating their efforts. Noticeable success was reached in 2003 when a regional consultative mechanism has been established with the assistance of the UNCCD secretariat to promote activities such as the establishment of Regional Thematic Networks (RTNs) on scientific cooperation; the organization of workshops on technology and know-how; the organization of Regional Training Centers (RTCs); and the establishing Regional Reference Centers (RRCs) for exchanging of documentation, materials and publications. Concrete activities are being launched to implement these agreements, in particular by Romania on establishment of an RTN on afforestation, by Armenia and Bulgaria on launching training courses and by the Czech Republic on establishment of an RRC. The common efforts can also contribute to rehabilitating lands degraded by industrial activities and nuclear wastes, to reducing the consumption of fertile soils by urbanization, and to sharing and monitoring the use of transboundary natural resources. Sub-regional activities are being undertaken aimed at managing drought in South Eastern Europe. In view of predictable increase of



Photo © Giorgi Kolbin

drought occurrence, frequency and impacts, the countries of South Eastern Europe (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Greece, Hungary, Republic of Moldova, Romania, Slovenia, and Turkey, as well as Montenegro and Serbia) established in 2006 a Drought management Center for South Eastern Europe in the context of the UNCCD, hosted by Slovenia and in cooperation with the UNCCD secretariat and WMO. The Center also involves countries from Northern Mediterranean.

The annex also stimulates action at national level by the affected CEE countries. In particular, importance of issues of land

degradation and desertification for sustainable land management is gradually recognized by the countries of the region. This trend is being confirmed by a growing number of affected countries that have already prepared National Action Programmes (NAPs) as a main instrument for combating desertification and land degradation. As of February 2008, these countries are Armenia, Georgia, Republic of Moldova and Romania. Other affected countries are in the process of preparing or finalizing their NAPs (Azerbaijan and Bulgaria) or expressed an interest in preparing them. The preparation of NAPs is a dynamic ongoing process and the status of each country is subject to change over time. As

in other regions, interested research institutes, non-governmental organizations (NGOs) and local communities are encouraged to participate in the preparation, coordination and implementation of NAPs. The 10-year strategic framework to enhance the implementation of the Convention (2008-2018) will guide the action of all regional stakeholders in putting into practice those policies and marks an important step towards the achievement of their objectives.

Relevant parts of the Convention

Annex V: Regional Implementation Annex for Central and Eastern Europe



UNCCD towards new decade

to forge a global partnership to reverse and prevent desertification/land degradation and to mitigate the effects of drought in affected areas in order to support poverty reduction and environmental sustainability

UNCCD coming into a new decade

Developed as a result of the Rio Summit, the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is a unique instrument that has brought attention to land degradation where exist some of the most vulnerable ecosystems and people in the world. Ten years after its coming into force, the UNCCD benefits from universal membership and is increasingly recognized as an instrument which can make an important contribution to the achievement of sustainable development and poverty reduction.

Ten years of implementation limited by some global factors

After a decade of implementation, Parties recognized limiting factors have prevented optimal deployment of the Convention. The Convention operates today in an environment that has evolved considerably since when it was first negotiated.

The policy environment has changed

Development paradigm has shifted largely since the Rio, especially with adoption of the Millennium Development Goals (MDGs). More focus on issues - such as Africa and the least-developed countries, stronger commitment for climate change mitigation and adaptation, prospects of global agricultural trade liberalization, and growing numbers of environmental refugees and migrants - are shedding new lights on the impacts of poverty and environmental degradation today.

The scientific environment has changed

With the work of the Millennium Ecosystem Assessment (MA) on dryland ecosystems, the scientific environment has also evolved, contributing to improved understanding of the biophysical and socio-economic trends relating to land degradation in global drylands and their impacts on human and ecosystem well-being.

The financing environment has also changed profoundly in the last decade

In 2003, the Global Environment Facility (GEF) has become a financial mechanism of the Convention. Official development assistance (ODA) flow has increased again after ten years of stagnation, and declining resources for rural development and agriculture. Major cooperating partners have refocused their financing strategies to support country-driven priorities.

This new environment provides the starting point for the new strategic plan of the Convention

During COP 8, held in Madrid in September 2007, the 192 Parties unanimously adopted the 10-year strategic plan and framework to enhance the implementation of the Convention for 2008-2018 (The Strategy). The Strategy provides unique opportunity to address some of the Convention's key challenges, to capitalize on its strengths, to seize opportunities provided by the new policy and financing

environment and to create a new and revitalized common ground for all UNCCD stakeholders.

The new Strategy is tasked to provide a global framework

The Strategy supports the development and implementation of national and regional policies, programmes and measures to prevent, control and reverse desertification/land degradation and mitigate the effects of drought through scientific and technological excellence, raising public awareness, standard setting, advocacy and resource mobilization, thereby contributing to poverty reduction.

The strategic objectives and expected impacts of the Strategy

Four strategic objectives with their own long-term impacts will guide the actions of all UNCCD stakeholders and partners to achieve the global vision. These four strategic objectives are: 1)

to improve the living conditions of affected populations, 2) to improve the condition of affected ecosystems, 3) to generate global benefits through effective implementation of the UNCCD and 4) to mobilize resources to support the implementation of the Convention through building effective partnerships between national and international actors.

Successful implementation of The Strategy requires efforts from all Parties

All parties are requested to put into operation the implementation of The Strategy in accordance with their national priorities and in a spirit of international solidarity and partnership. Affected developing country Parties, and any other affected country Parties within the framework of its Regional Implementation Annex, are urged to align their action programmes and other relevant implementation activities relating to the Convention with The Strategy.

The secretariat's new Structure

Successful implementation of the strategic plan also requires a strengthening of the core servicing, advocacy and agenda-setting and representation functions of the UNCCD secretariat in order to support Parties, the COP and the subsidiary bodies of the Convention in fulfilling their respective roles. The aim is to make the UNCCD secretariat a robust and highly performing international organization which will facilitate the implementation of the Strategy and build a global momentum on land issues. In light of the vision envisaged in The Strategy, the new structure pays greater attention to the need to support the continuum between "knowledge management", "information and policy advocacy" and "monitoring and assessment of the implementation process" through cooperation and partnership.

OUR MEANS THROUGH COOPERATION & PARTNERSHIP

